

Es complicado. Unas ideas sobre la relaciÃ³n entre el narcotrÃ¡fico y el conflicto armado

DescripciÃ³n

default watermark

AÃ±o tras aÃ±o se repite entre medios de comunicaciÃ³n y altos funcionarios la creencia de que el narcotrÃ¡fico y los grupos armados en Colombia son dos caras de la misma moneda. Y si bien el vÃ-nculo es estrecho, amalgamar los dos fenÃ³menos no es mÃ¡s que una conclusiÃ³n apresurada. Â¿CÃ³mo detener la retahÃla y replantearnos la forma en que entendemos el rol de las drogas en el conflicto colombiano?

Hace un poco mÃ¡s de veinte aÃ±os, Paul Collier y Anke Hoeffler, economistas del Banco Mundial, propusieron un argumento radical para el anÃ¡lisis de las guerras civiles: los grupos rebeldes no estÃ¡n motivados por ideologÃas (grievances) sino por una cosa mÃ¡s sencilla: la plata (greed).

Esta tesis generÃ³ una ola de anÃ¡lisis de diferentes conflictos y actores armados en todo el planeta â??especialmente en Ã•fricaâ??, que tambiÃ©n incluÃa a Colombia. El conflicto armado en el paÃs, y en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se convirtieron en un frecuente objeto de anÃ¡lisis para poner esta visiÃ³n a prueba.

Numerosos estudios encontraron que, en efecto, la tesis de Collier partÃa de una dicotomÃa falsa. En realidad, muchos de los grupos armados en el mundo han mantenido una lÃnea ideolÃ³gica al tiempo que manejan recursos financieros impresionantes, incluso las FARC. Collier tuvo que ajustar su argumento y al final quedÃ³ en que los grupos armados simplemente necesitan recursos financieros para hacer su guerra. Las finanzas representan una variable necesaria, pero no suficiente.

En Colombia, el debate sobre las tesis de Collier se ha enfocado en el narcotrÃ¡fico y sus efectos en la violencia, los actores armados y el propio conflicto, que a lo largo de los aÃ±os ha sufrido varios cambios profundos: la desmovilizaciÃ³n de los paramilitares y la consecuente creaciÃ³n de diferentes grupos armados herederos de los mismos; el acuerdo de paz con las FARC, firmado en 2016; la gÃ©nesis de las comÃºnmente llamadas â??disidenciasâ?• de esa guerrilla, y la polÃtica de Seguridad DemocrÃ¡tica, entre otros.

Al mismo tiempo, el narcotrÃ¡fico tambiÃ©n ha cambiado. En muchos lugares del paÃs se ha consolidado la atomizaciÃ³n y especializaciÃ³n de numerosos actores que juegan papeles especÃficos

en el negocio ilÃcito. Los inversionistas de bajo perfil, que a menudo viven en las ciudades y no tienen ningÃºn contacto con la droga ni con los quÃmicos, son cada vez mÃ¡s centrales. La producciÃ³n de cocaÃna ha subido y bajado drÃ¡sticamente hasta la actualidad, cuando se produce la mayor cantidad en la historia del paÃs.

La relaciÃ³n entre narcotrÃ¡fico y conflicto armado es polifacÃ©tica y no se presta para grandes conclusiones generales. VarÃa segÃºn la Ã©poca, el actor, la geografÃa y el eslabÃ³n del negocio ilÃ-cito de que se trate. Pensar que â??todo ocurre por el narcotrÃ¡ficoâ?• es una simplificaciÃ³n casi grosera que obstaculiza la bÃºsqueda de soluciones duraderas para la superaciÃ³n de la violencia polÃtica en el paÃs.

Aunque parezca obvio, cabe resaltar que son dos fenÃ³menos que se traslapan y se entrelazan, pero no son lo mismo. Por ende, pensar que la polÃtica de seguridad contra el conflicto armado puede ser la misma polÃtica antinarcÃ³tica â??como lo planteÃ³ el reciÃ©n fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para justificar la fumigaciÃ³nâ?? es perezoso y contraproducente, en el mejor de los casos.

default watermark

El Combustible y la doble causalidad

El conflicto armado colombiano ha sido uno de los mÃ¡s largos en el planeta, en parte gracias al narcotrÃ¡fico, que ha servido de combustible para los grupos armados ilegales. En Ã©l encontraron una fuente de finanzas para comprar mÃ¡s y mejores armas, y para pagarles mejor a sus miembros. Al final de la guerra frÃa, varios grupos rebeldes de AmÃ©rica Latina vieron que el apoyo financiero de la UniÃ³n SoviÃ©tica, entonces ya disminuido, se acababa del todo, lo cual propiciÃ³ los procesos de paz que los disolverÃan. No obstante, la pÃ©rdida del apoyo soviÃ©tico no fue la Ãºnica razÃ³n de su fin. Por ejemplo, en El Salvador, el FMLN habÃa lanzado dos ofensivas para tumbar al gobierno, que no fueron exitosas; la primera en 1981 y la segunda en 1989. En Guatemala, los intentos de negociar la paz datan de los aÃ±os ochenta y tambiÃ©n estaban vinculados a cambios polÃticos, entre ellos el fin de la guerra frÃa.

Mientras tanto, en Colombia, el narcotrÃ¡fico ya aseguraba algunas finanzas para los grupos paramilitares y en particular a las FARC. Pero ese no es el Ãºnico factor que explica la continuaciÃ³n de la guerra desde los noventa hasta la actualidad. Por un lado, los grupos armados ilegales han tenido otras fuentes importantes de financiaciÃ³n: la extorsiÃ³n masiva, incluso a empresas multinacionales, y el secuestro, crimen que fue convertido en una â??industriaâ?• por las FARC y el EjÃ©rcito de LiberaciÃ³n Nacional (ELN), para mencionar solamente las dos guerrillas principales del conflicto. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por su parte, tambiÃ©n se apoderaron del Estado en varias regiones, y de las rentas que provenÃan de los contratos.

Al mismo tiempo, las condiciones sociales, polÃticas y econÃ³micas que habÃan causado y alimentado el conflicto â??la desigualdad, la falta de acceso a tierras (empeorada por la contrarreforma agraria de los paramilitares), el cierre del espacio polÃtico tras el aniquilamiento de la UniÃ³n PatriÃ³tica y una institucionalidad estatal bastante dÃ©bil si no ausente en muchas zonas del paÃs, aparte de la ausencia o incapacidad de la fuerza pÃºblica en esos lugaresâ?? contribuyeron a la continuidad del conflicto con las FARC y el ELN despuÃ©s de la terminaciÃ³n de la guerra frÃa, y hasta la actualidad, en el caso del segundo grupo.

Algunos han argumentado que, de forma cÃclica, el narcotrÃ¡fico ha permitido la continuidad del conflicto, y a su vez, este ha contribuido a la continuidad del narcotrÃ¡fico. En su libro Y refundaron la

patriaâ?¦ De cÃ³mo mafiosos y polÃticos reconfiguraron el Estado colombiano, la alcaldesa Claudia LÃ³pez afirma que los cultivos de coca son el â??resultado de las necesidades de la financiaciÃ³n pari passu con el escalonamiento del conflicto y la expansiÃ³n del conflicto armadoâ?•. Lo cierto es que, aunque la causalidad cÃclica a nivel general puede tener bastante fuerza argumentativa, al analizar los diferentes casos y momentos, la relaciÃ³n no siempre es sencilla.

El argumento, asÃ explicado, implica que los actores armados en general han tenido un papel directo al imponer los cultivos de coca en el paÃs para aprovechar la plata que de ellos extraen. En algunas zonas se puede decir que es asÃ, como en la zona rural de Tumaco, donde despuÃ©s del Plan Colombia las FARC impulsaron un proceso de colonizaciÃ³n para que hubiera coca en la regiÃ³n. En 2019, un lÃder campesino del Guaviare me comentÃ³ que la disidencia del Frente Primero, instalada en el sur del departamento, ha promovido el cultivo de coca en los municipios de Calamar y Miraflores. Y el aÃ±o pasado, en el Catatumbo, un experto en narcotrÃ¡fico me asegurÃ³ que son los grupos armados los que en muchos casos prestan la plata a campesinos para que siembren coca.

Pero en otras zonas, el papel de los actores armados ha sido â??o fueâ?? menos directo. Al controlar el territorio y permitir y regular el narcotrÃ¡fico, simplemente dejaron que llegaran miles de personas para participar de alguna forma en el negocio, sin el incentivo directo. La colonizaciÃ³n cocalera del Bajo Putumayo fue algo permitido por las FARC, pero no necesariamente la promovieron de forma directa, pues puede haber una diferencia entre darles Ã³rdenes a las comunidades creadas durante los auges cocaleros y promover la participaciÃ³n en el negocio a beneficio del grupo armado. Lo mismo se podrÃa decir del Guaviare en las dÃ©cadas de 1970 y 1980.

default watermark

La violencia

Diferentes autores tambiÃ©n afirman que el narcotrÃ¡fico ha generado un aumento en la violencia en Colombia, incluso despuÃ©s del proceso de desmovilizaciÃ³n de las AUC entre 2003 y 2006, y del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Hay razÃ³n para pensarlo: los municipios con una economÃa cocalera tienden a tener mayores tasas de homicidios que los que no la tienen. Sin embargo, no estÃ¡ claro si el mecanismo causal es el negocio ilÃcito en sÃ u otro.

Medir esta tesis en diferentes niveles muestra lo compleja que es. Por ejemplo, a nivel paÃs, no existe una clara relaciÃ³n entre la cantidad de cocaÃna producida o el nÃºmero de cultivos de coca y el grado de violencia vinculada al conflicto armado. Durante las negociaciones de paz con las FARC, se redujeron diferentes formas de violencia mientras la producciÃ³n de cocaÃna tenÃa un aumento histÃ³rico.

Adicionalmente, este argumento puede confundir la existencia de los grupos armados â??explicable en parte por las finanzas del narcotrÃ¡ficoâ?? y su uso de la violencia. DespuÃ©s de la firma del acuerdo de paz con las FARC, han aparecido numerosos grupos alzados en armas, principalmente disidencias de las FARC. Varios de ellos se han disputado los territorios y espacios en las estructuras de poder, vaciados por la dejaciÃ³n de armas de esa guerrilla, lo que explicarÃa mejor los niveles de violencia.

Tumaco, Putumayo, Cauca y Guaviare son buenos ejemplos. La violencia en Tumaco, particularmente en la cabecera por la que pasan varias rutas del narcotrÃ¡fico, aumentÃ³ durante 2017 y 2018 porque uno de los grupos armados que opera en la parte urbana del municipio acusaba a otro de ser culpable de la muerte de su primer comandante y de haberlo â??sapeadoâ?•. Aquel torrente de violencia siguiÃ³ hasta diciembre de 2018, cuando llegaron a un acuerdo. A primera vista, serÃa una guerra por el narcotrÃ¡fico, pero una mirada mÃ¡s profunda muestra un escenario mÃ¡s complejo.

Putumayo presenciÃ³ un aumento de los cultivos de coca desde antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Poco despuÃ©s de la dejaciÃ³n de armas, los niveles de violencia estuvieron bastante bajos en ese departamento. Fue luego, en 2019, cuando empezÃ³ la disputa entre el Frente Carolina RamÃrez, presente sobre todo en el Medio Putumayo, y la Mafia 48, en el Bajo Putumayo. Entonces la violencia empezÃ³ a arreciar.

Por otro lado, los municipios de Argelia y El Tambo, en el departamento del Cauca, han sido epicentros del narcotrÃ¡fico por casi veinte aÃ±os: cultivos de coca, laboratorios para pasta y hasta numerosos â??cristalizaderosâ?•, donde se convierte la pasta de coca en cocaÃna. Desde allÃ se pueden traficar drogas hacia los municipios de Guapi, TimbiquÃ y LÃ³pez de Micay, e incluso hacia el ocÃ©ano PacÃ-fico. Los niveles de violencia, segÃºn la correlaciÃ³n coca-violencia, deberÃan ser muy altos. Sin embargo, los dos brotes mÃ¡s duros han sido entre 2006 y 2009, y de 2019 hasta la actualidad. En el primer momento, el ELN y Los Rastrojos se juntaron para luchar contra las FARC, y en el segundo se ha dado un conflicto entre el ELN y una disidencia de las FARC.

En algunos lugares del Guaviare, como aquellos a orillas del rÃo InÃrida y el VaupÃ©s, la vida gira alrededor de los cultivos de coca. En varios pueblos, el gramo de pasta de coca se usa como moneda cuando el efectivo escasea. TambiÃ©n existen numerosos laboratorios de pasta de coca y cristalizaderos, cuya producciÃ³n se trafica por los rÃos hacia Venezuela y Brasil. Sin embargo, la violencia es casi nula: es poco comÃºn que se den desplazamientos forzados, homicidios causados por los actores armados o violencia sexual, aunque es cierto que el control de la vida social es muy fuerte. AquÃ, aunque hay narcotrÃ¡fico, la violencia es bastante baja.

default watermark

En Colombia es comÃºn creer que cuando un actor armado somete a la poblaciÃ³n civil a altos niveles de violencia, debe ser porque solo estÃ¡ interesado en la plata y el narcotrÃ¡fico. Sin embargo, esta es una simplificaciÃ³n que la evidencia no apoya tan categÃ³ricamente. Esa violencia puede darse en el contexto de una disputa o puede ser utilizada para hacer cumplir una serie de reglas impuestas por el grupo armado[1]. Al mismo tiempo, la violencia puede ser una herramienta para generar terror, independientemente de las metas del agente que la causa. Incluso, como el investigador sueco Michael Jonsson y yo afirmamos en un trabajo previo al encontrar diferentes tipos de violencia que el Frente 48 de las FARC ejercÃa contra distintos blancos, segÃºn su percepciÃ³n del riesgo bÃ©lico que enfrentaba y el perfil del comandante local, esta puede responder a las percepciones de los grupos armados sobre la amenaza militar que enfrentan.

Motivaciones

Se podrÃa argumentar que las disputas son por el control de las rutas del narcotrÃ¡fico y, por ende, que la violencia realmente es ocasionada por el narcotrÃ¡fico. Sin duda, esto hace parte de la motivaciÃ³n de los lÃderes de los grupos armados hoy en dÃa, pero tampoco explica todo lo que ocurre.

Cinco temas claves se deben tener en cuenta ante este argumento. En primer lugar, el papel del narcotrÃ¡fico como motivaciÃ³n no es igual para todos los actores armados del paÃs, y no se podrÃa decir que todos cuentan con un accionar ideolÃ³gico. SegÃºn un texto de Francisco GutiÃ©rrez SanÃn y Elisabeth Wood, un grupo armado tiene ideologÃa si se cumplen estos requisitos: 1) manifestar su defensa de un sector de la poblaciÃ³n mÃ¡s allÃ¡ del grupo mismo; 2) identificar los desafÃos y quejas de ese sector de la poblaciÃ³n; 3) expresar objetivos relacionados con la superaciÃ³n de esos desafÃ-os, y 4) tener algÃºn plan de acciÃ³n para lograrlo. Es decir, se requiere por lo menos de una visiÃ³n

de cambio hacia el futuro. Simplemente poder interpretar el presente a travÃ©s de un lente polÃtico-ideolÃ³gico no es suficiente. Mientras el ELN tiene, segÃºn esta definiciÃ³n, una ideologÃa que influye en sus estrategias, aparte de sus intereses econÃ³micos y polÃticos, un grupo como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), vinculado sobre todo al crimen organizado, no parece buscar superar los problemas de la poblaciÃ³n de las regiones donde opera.

En segundo lugar, es importante diferenciar los motivos de los comandantes de los grupos armados y los miembros rasos, que suelen ser bastante diferentes. Los lÃderes pueden tener motivaciones ideolÃ³gicas, como ocurriÃ³ con las cÃºpulas del ELN y las FARC en su momento, o principalmente econÃ³micas, como las de alias Macaco o Don Berna, en las AUC. Los rasos, sin embargo, se unen al conflicto por una mayor variedad de razones, las cuales incluyen falta de oportunidades laborales, redes de amistades, atracciÃ³n por las armas, afinidad con la ideologÃa del grupo y bÃºsqueda de venganza, entre otras.

En tercer lugar, el narcotrÃ¡fico no es la Ãºnica economÃa ilÃcita en el paÃs. La minerÃa ilegal, el trÃ¡fico de combustible, la tala ilegal de madera y la extorsiÃ³n tambiÃ©n son centrales en los portafolios de los actores armados. Por tanto, el narcotrÃ¡fico es solo una parte de una realidad mucho mÃ¡s enrevesada en tÃ©rminos de motivos econÃ³micos.

default watermark

En cuarto lugar, las motivaciones de los grupos armados pueden cambiar a travÃ©s del tiempo. En Colombia es comÃºn argumentar que la guerrilla empezÃ³ con una ideologÃa clara, pero que a travÃ©s del tiempo â??y debido al narcotrÃ¡ficoâ?? se fue corrompiendo. Es posible que lo mismo ocurra hacia el futuro con grupos como las disidencias de las FARC, pero de forma inversa: aunque pareciera que por ahora no tienen una ideologÃa y sus intereses principales son econÃ³micos, pueden ir desarrollando una visiÃ³n del cambio polÃtico en la medida en que consolidan su control territorial y van construyendo una base social (asÃ lo manifestÃ³ Francisco GutiÃ©rrez SanÃn en respuesta a una presentaciÃ³n que hice en 2019 sobre violencia, gobernanza y grupos armados en el PacÃfico).

Finalmente, pensar en lo ideolÃ³gico versus lo criminal tambiÃ©n es una falsa dicotomÃa. Los grupos armados tienen mÃºltiples intereses y motivaciones, no mutuamente excluyentes. Sin embargo, la falta de una ideologÃa sÃ podrÃa indicar que el grupo armado en cuestiÃ³n cabrÃa en la categorÃa de crimen organizado o de los â??seÃ±ores de la guerraâ?•, no en la insurgencia o la guerrilla.

Poder polÃtico local

En las zonas de producciÃ³n de coca y cocaÃna, el control territorial de los grupos armados ilegales tiende a ser bastante fuerte. Ese control permite que el negocio funcione, en parte porque los actores armados pueden proveer algo de protecciÃ³n al negocio y porque tal control territorial a menudo los convierte en una autoridad cuya permisividad frente a diferentes actividades ilegales los vuelve, en efecto, â??legalesâ?•.

TambiÃ©n, en muchos de estos lugares la economÃa y la sociedad locales dependen del narcotrÃ¡fico para sus ingresos (el acadÃ©mico que mejor ha trabajado este tema en Colombia es Gustavo Duncan, especialmente en su libro MÃ¡s que plata o plomo, publicado por Debate en 2014). Es mÃ¡s, hay sitios tan aislados en Colombia que es difÃcil imaginar que allÃ¡ la vida fuera posible sin la coca. Dado que el narcotrÃ¡fico requiere de un actor con capacidad de violencia para regularlo y asÃ funcionar, se genera una situaciÃ³n en la que la sociedad local depende del grupo armado para su bienestar econÃ³mico.

Sin embargo, el control territorial es fluido y la violencia no es suficiente para establecerlo. Por lo tanto, los grupos armados â??incluso los criminalesâ?? deben responder a ciertas exigencias de la sociedad local para lograr la colaboraciÃ³n necesaria y sobrevivir, o si no, corren el riesgo de que los habitantes busquen echarlos directamente o a travÃ©s de otro grupo armado. Por ende, no solamente mantienen la economÃa (ilegal) local, sino que tambiÃ©n proveen un tipo de protecciÃ³n y orden, resolviendo las disputas de los pobladores, entre otras cosas. AsÃ logran el control territorial polÃtico, que fortalece los lazos de la dependencia creada por la regulaciÃ³n o participaciÃ³n en el narcotrÃ¡fico.

Esto todavÃa ocurre hoy en dÃa. Sentado en una mesa, en la esquina del parque principal de un corregimiento en la zona rural de Tumaco, un comandante de una disidencia de las FARC me dijo:

â??Si yo no traigo orden, Â¿quiÃ©n lo harÃ¡? â??mientras exigÃa el homicidio de un drogadicto que no habÃa seguido sus instrucciones de irse del pueblo.

En otro caserÃo en ese municipio, al preguntarle a una lideresa quÃ© harÃa la gente si el gobierno entrara a fumigar, ella decÃa simplemente que â??buscarÃamos a Guacho para que nos protegieraâ?• . Se trataba del comandante del Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC en NariÃ±o, que fue dado de baja en una operaciÃ³n militar en diciembre de 2018.

default watermark

En un corregimiento rural del Guaviare, vi a un comandante de la disidencia del Frente Primero resolver una pelea entre dos familias que habÃan acordado correr los linderos de sus fincas para asÃ abrir una trocha entre las dos. Una familia lo hizo, la otra no, por lo que le pidieron al comandante que arreglara el asunto. En otro pueblo del Guaviare, un habitante me contÃ³ cÃ³mo la poblaciÃ³n local no querÃa que Ã©l abriera una tienda ahÃ. Fue adonde el comandante regional de la disidencia, quien le dijo que mientras Ã©l respetara las reglas del pueblo podÃa trabajar ahÃ. Poco despuÃ©s recibiÃ³ pasta de coca como forma de pago por unas cervezas.

En El Plateado, un corregimiento de Argelia, Cauca, que vive directamente de la coca â??pues es el Ãºnico cultivo que se ve en las montaÃ±as desde el pueblôâ??, algunos habitantes me decÃan en 2018 que era gracias a la guerrilla â??en ese momento el ELNâ?? que no habÃa delincuencia ni robos en el pueblo.

Ese mismo tipo de control polÃtico lo hacÃan las AUC en las zonas donde se habÃan asentado. Actualmente, las AGC tambiÃ©n llevan a cabo estas acciones de proveer orden o resolver disputas en lugares como CÃ³rdoba y ChocÃ³, donde ademÃ¡s argumentan que protegen del ELN a las comunidades.

AsÃ, los grupos armados logran convertir en control territorial, y muchas veces en legitimidad, su papel en el narcotrÃ¡fico, lo cual contribuye a la continuidad del negocio y del conflicto.

Una polÃtica mal pensada

El reciÃ©n fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, argumentaba que la lucha contra el narcotrÃ¡fico, definida por Ã©l como la lucha contra los cultivos de coca, es la mejor manera de acabar con los grupos armados y por ahÃ derecho con todo el conflicto armado en el paÃs. Se basaba en la idea de que los actores armados necesitan de finanzas para sobrevivir, y que atacar sus fuentes de rentas es la mejor manera de acabar con ellos. TambiÃ©n utilizaba este argumento para tratar de justificar la fumigaciÃ³n de cultivos ilÃcitos en el paÃs. Sin embargo, este texto ha dado varias pistas de por quÃ© la realidad no es asÃ de sencilla.

Tales polÃticas les brindan mayor legitimidad a los actores armados, pues las comunidades involucradas en los cultivos ilÃcitos pueden buscarlos para pedirles protecciÃ³n frente a la acciÃ³n del Estado. Esto traerÃa, a su vez, un mayor riesgo de violencia, incluyendo atentados contra las unidades de erradicaciÃ³n o contra los militares y la policÃa en general. TambiÃ©n aumentarÃa el uso de las minas antipersonas para frenar la erradicaciÃ³n, con un gran costo humanitario.

Actualmente, los grupos armados tienen otras fuentes de financiaciÃ³n con las que podrÃan reemplazar el narcotrÃ¡fico, pero es un tema complejo. Hay una variedad regional importante y no todas las economÃas ilegales son iguales. La minerÃa ilegal, segÃºn algunas estimaciones, da mÃ¡s dinero que el trÃ¡fico de drogas, pero el oro es un recurso finito. La minerÃa ilegal ademÃ¡s solo se puede desarrollar donde hay minerales; la del oro, en particular, se realiza en Antioquia, ChocÃ³, Cauca, CaquetÃ¡ y NariÃ±o principalmente. El trÃ¡fico de combustible, oro y coltÃ¡n en la frontera con Venezuela ya financia a diferentes actores armados, aunque con la devastadora situaciÃ³n en el paÃs vecino la disponibilidad de gasolina para traficar ha disminuido impresionantemente en los Ãºltimos aÃ±os. Sin embargo, en diferentes enclaves cocaleros como Putumayo, el PacÃfico nariÃ±ense, los municipios de Argelia y El Tambo en Cauca, e incluso en Catatumbo, es difÃcil imaginar un conflicto tan intenso como el actual sin el narcotrÃ¡fico.

default watermark

De cualquier forma, actividades como la erradicaciÃ³n forzada o la fumigaciÃ³n son extremadamente inefectivas. Optar por estas polÃticas para acabar con los cultivos ilÃcitos â??y asÃ debilitar a los grupos armados y disminuir la violenciaâ?? simplemente serÃ¡ un esfuerzo sin fin, que no lograrÃ¡ cumplir el inverosÃmil objetivo de erradicar por completo la coca, la marihuana y la amapola.

En esencia, la polÃtica antinarcÃ³ticos no es una polÃtica de seguridad. En estas Ãºltimas uno de los puntos centrales debe ser la protecciÃ³n de la poblaciÃ³n civil, elemento que no hace parte de la polÃtica antinarcÃ³ticos. Es mÃ¡s, la erradicaciÃ³n forzada y la fumigaciÃ³n llevan la idea implÃcita de que los campesinos cocaleros son simples criminales que merecen un tratamiento como tales. No es asÃ.

Finalmente, Holmes Trujillo no proponÃa superar las causas detrÃ¡s de la siembra de los cultivos ilÃcitos. Algunas de ellas â??la falta del acceso a la tierra y un desarrollo econÃ³mico insuficienteâ?? tambiÃ©n han alimentado el conflicto armado. Es otro vÃnculo entre este y el narcotrÃ¡fico. SerÃa mucho mÃ¡s fructÃfero abordar estos problemas de frente si Colombia quiere algÃºn dÃa lograr la paz.

* Texto publicado originalmente en El Malpensante EdiciÃ³n 226

1 Para un ejemplo reciente, vÃ©ase Human Rights Watch, 2020, *â??The Guerrillas Are the Policeâ?•: Social Control and Abuses by Armed Groups in Colombiaâ??s Arauca Province and Venezuelaâ??s Apure State*, en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/colombia0120_web.pdf.

CategorÃa

1. Publicaciones

Etiquetas

1. Colombia
2. Conflicto armado
3. NarcotrÃ¡fico

Fecha de creaciÃ³n
01/03/2021
Autor
stack

default watermark